

EDITORIALES

Reavivar el proceso

La hoja de ruta soberanista catalana trata de superar el fracaso de las europeas y persiste en su desafío a la legalidad vigente

Los partidos Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña firmaron ayer un escueto preacuerdo sobre la hoja de ruta unitaria del proceso soberanista con la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y Òmnium Cultural. El pacto parte de las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre y establece que los partidos soberanistas dejarán claro en el punto primero de sus programas electorales que votarles supone un pronunciamiento favorable a la independencia de Cataluña. A partir de ahí, el proceso de transición nacional hacia la República catalana durará un máximo de 18 meses. En diez meses, deberá haberse elaborado el proyecto de Constitución. El documento, que tiene una entonación épica que ronda lo pueril, enumera las actuaciones tendentes a la puesta en pie del nuevo Estado, indica la necesidad de negociar con el Estado español y las instancias internacionales, y establece que al final del proceso se celebrará un referéndum vinculante sobre el texto constitucional. Esta declaración, más romántica que política, que no ha sido suscrita por Unió Democràtica de Catalunya ni por EUIA, llega cuando en Cataluña ha decantado una visible y contundente corriente de opinión que considera que el proceso soberanista ha fracasado, entre otras razones porque el simulacro de referéndum del pasado 9 de noviembre no consiguió la suficiente masa crítica independentista para que la propuesta fuese siquiera verosímil. Consumada aquella intentona sin éxito, la mejoría en los datos económicos y el hecho de que se aproximen el final de la legislatura y un ciclo de nuevos equilibrios políticos han desactivado la pulsión independentista y la han alejado de sus objetivos maximalistas. En cualquier caso, no está de más recordar que nuestro ordenamiento no prevé las elecciones plebiscitarias, en las que el soberanismo podría lograr mayoría absoluta con el apoyo de poco más de la cuarta parte del censo, sin que ello pueda legitimar, como es obvio, secesión alguna. De todos modos, el Estado democrático tiene, como ya se ha visto, los medios para mantener el imperio de la ley ante cualquier intento de sabotear el sistema político que nos hemos dado y que disfruta del aprecio de una mayoría muy clara de españoles.

Despropósito del Gobierno

Uteca, que agrupa a los operadores de televisiones privadas en abierto, acusó ayer al Gobierno de «hostigamiento». Las palabras del director general de la agrupación, Andrés Armas, fueron más que explícitas. A su entender, el deficiente proceso de resintonización de la TDT, que ha expirado esta madrugada, denota una significativa falta de interés del Ministerio de Industria por facilitar a los ciudadanos la correcta recepción de los canales. La tributación prevista –todavía por determinar por Hacienda– para los hogares por la reanteriorización de sus receptores sería otra muestra de ello, junto a la complacencia con la que el Gobierno parece contemplar el posible cierre judicial de más canales de TDT. Todo indica que el Ejecutivo que preside Rajoy opta por favorecer a los canales de pago y por avalar la subsistencia de las radiotelevisiones públicas a costes insostenibles para el erario nacional o autonómico, a no ser que el desencuentro entre las cadenas privadas que atienden a demandas y concesiones públicas y los designios de Moncloa se deba más a una sucesión de despropósitos que a una concepción intervencionista y, en esa misma medida, arbitraria sobre el espacio televisivo.

LA RIOJA

DIARIO DE LA RIOJA DESDE 1889

Director José Luis Prusén de Blas

Subdirector

Julián Iñigo Boillos

Coordinación de Ediciones

Jorge Alacid López

Información

José Ángel González Olalla

Opinión y Suplementos

José A. del Río Sacristán

Fin de Semana

Pío García Tricio

Cierre

Marcelino Izquierdo Vozmediano

Jefes de Área

Javier Ezquerro Ramírez

(La Rioja)

José Martínez Glera

(Deportes)

Isabel Martínez Ramos

(Culturas y Sociedad)

José A. Martínez Medrano

(Gráfica)

Luis Sáez Angulo

(Comarcas)

NUEVA RIOJA S.A.

Director General

Javier Doval López

Directora de Control de Gestión

Blanca García Calvo

Director Comercial

Pablo Amillano Urdampilleta

Director de Tecnología y Sistemas

Enrique Medrano Llorente

Directora de Marketing

Susana Miranda Mayoral

Por una reforma del sistema institucional

JORGE SAN MIGUEL Y PABLO SIMÓN

EDITORES DE POLITIKÓN

«El paso más urgente es despolitizar la Administración, poniendo las decisiones técnicas en manos de los funcionarios, reduciendo el volumen de cargos de libre designación y dificultando sus pasarelas a la política»

Este 2015 va a ser un año repleto de cambios, y las pasadas elecciones andaluzas no hicieron sino anticipar la fragmentación de nuestro sistema de partidos. Es dudoso si esta situación se ha fraguado desde 2010, o si tiene que ver con la incapacidad del Partido Popular para revertir la situación al llegar al Gobierno, o con el hartazgo de los españoles más adelante. Incluso hay quien apunta a que todos los males vienen desde el origen mismo del sistema en 1978. Sea cual sea el punto de arranque, el diagnóstico es claro: el vínculo entre los españoles y la política tradicional está quebrado, como muestra la irrupción electoral tanto de Podemos como de Ciudadanos.

Es verdad que los ciudadanos contemplan el futuro económico de forma menos pesimista que hace unos años, pero mantienen oscuras expectativas sobre la situación política. Quienes pensaban que bastaría la mejora económica para recuperar el caudal de legitimidad en el sistema político parecen haber errado estrepitosamente. En muchos casos lo acabarán pagando en las urnas. Sin embargo, creemos que el *quién* es menos importante hoy que el *qué* hacer.

A nuestro juicio, el sistema político ha vivido una tormenta perfecta en la que todos los elementos se han realimentado. Por un lado, partidos y agentes sociales han devenido organizaciones monolíticas, que no seleccionan el talento y promueven liderazgos mediocres. Su pobre sistema de reclutamiento, cerrado y vertical, ha dificultado la rendición de cuentas interna incluso cuando los partidos perdían elecciones. Además, el sistema electoral agravaba el problema al minar la competencia con terceros partidos y favorecer, mediante listas cerradas y bloqueadas, el control de las cúpulas.

Por otra parte, este entramado de factores ha favorecido que la corrupción se haya convertido en mal endémico. Durante la burbuja, amplios sectores del electorado han percibido que los 'pelotazos' y otras formas de corrupción les beneficiaban también en alguna medida, aunque fuera como migajas, lo que ha llevado a una cierta complacencia. Ni la sociedad civil, casi siempre desarticulada y colonizada por unos partidos que controlan el grifo de los recursos públicos, ni unos medios de comunicación frágiles y dependientes del poder político, han cumplido sus funciones de fiscalización. El maná de la burbuja y de las rentas europeas ha enmascarado los problemas institucionales y las deficiencias de gestión. Hasta que el súbito estallido de la burbuja –que, contra el tópico, muchos vieron, pero ninguno supo o se atrevió a reventar– nos ha devuelto de golpe a la realidad.

Nuestro diagnóstico, crítico con políticos e instituciones, obliga también a la autocritica como sociedad. Con todo, una lectura optimista del proceso apunta al incremento del interés por la política, y a la creciente exigencia hacia nuestros representantes. Pero creemos que no podemos quedarnos ahí, ni siquiera en el acto votar. Debemos reclamar que nuestros representantes pongan las bases institucionales para una mejor política y para no volver a caer en los errores del pasado. Y eso es lo que discutimos en el libro *La urna rota*. No en forma de recetas universales –otra de las tentaciones recurrentes en momentos de crisis–, sino de propuestas provisionales, basadas en la evidencia empírica disponible, que analizamos con sus pros y contras.

Probablemente, el paso más urgente es despolitizar la Administración, poniendo las decisiones técnicas en manos de los funcionarios, reduciendo el volumen de cargos de libre designación y dificultando sus pasarelas a la política. Casi con seguridad eso reducirá las rentas de las directivas de los partidos, con menos prebendas que repartir, y favorecerá la competencia interna. También las listas electorales desbloqueadas y la celebración de primarias con acceso equitativo a los recursos podrían ser buena idea. Incluso podría plantearse el incremento de la proporcionalidad en nuestro sistema si asumimos, como parece que vamos a tener que hacer, que las coaliciones de gobierno sean algo tan natural aquí como en el resto de Europa.

Esta mayor profesionalización a buen seguro redundaría positivamente sobre la resistencia del sistema a la corrupción. También lo harían incentivos como favorecer los 'delatores' internos y protegerlos. Finalmente, es esencial fortalecer la sociedad civil, reduciendo barreras a la participación y promoviendo el asociacionismo y el debate informado, e introducir criterios más racionales en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas. Es clave que entendamos que la política es un compromiso ciudadano, que es cosa de todos.

Ninguna de estas medidas basta por sí sola para recomponer un sistema en entredicho. Ninguna carece de costes. Ahora bien, es exigible que todos los partidos, tanto nuevos como viejos, tengan una cuestión presente: reemplazar unos líderes por otros no acabará con los incentivos perversos que abundan en nuestro sistema. Lo urgente es reconocer que, más allá de cambiar los gobiernos o hacerlos más plurales, o de elegir a líderes más o menos virtuosos, si no reformamos a fondo nuestras instituciones, es probable que tropecemos con piedras muy parecidas a la vuelta de unos años.

GRAN RESERVA

ALBERTO VERA
RELIGIOSO MERCEDARIO

Obispo. Religioso aguilareño, su tarea pastoral en el sur de Mozambique ha merecido que el Papa Francisco le haya confiado el obispado auxiliar de la provincia de Xa-Xai.



VINAGRE

GERARDO DÍAZ FERRÁN
EXPRESIDENTE DE CEOE

Planes. La justicia ha abierto una investigación contra el expresidente de la patronal por presunta apropiación de 453 millones de dólares tras la compra de Aerolíneas Argentinas.

